



PULSO AMBIENTAL

REVISTA POLÍTICA Y DE DEBATE

Fundación Ambiente y Recursos Naturales | www.farn.org.ar |      /farnargentina

¿Quiénes defienden el ambiente en la Argentina?

Desde la Puna jujeña hasta el golfo San Matías, desde la precordillera mendocina hasta las costas de Mar del Plata. Nueve historias de personas, organizaciones y comunidades que dedican su vida a la protección y el cuidado del ambiente en nuestro país.



Dirección general
Andrés Nápoli

Dirección de contenido
Pía Marchegiani
Ana Di Pangrazio
Ariel Slipak
Leandro Gomez
María Belén Felix
Cristian Fernández

**Coordinación editorial
y periodística**
Santiago Pellegrini
Rocío Wischnevsky

Edición y corrección
Estudio REC

Diseño y diagramación
Cucha Estudio

Escriben
Agustina López
Emilia Delfino
Emiliano Ortiz
Facundo García
Iván Hojman
Jesús Allende
Jorgelina Hiba
Juan Chiummiento
Vanina Lombardi

Colaboran
Julia Gerlo
Michelle Fiszlejder
Laura Lapalma
Giselle Munno Dithurbide

**La presente edición de la Revista
Pulso Ambiental cuenta con
la colaboración de Fundación Böll.**

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de quienes escriben y no necesariamente coinciden con la de FARN.

FARN adopta la perspectiva de género en todos los aspectos de su trabajo. En ese sentido, en todas sus publicaciones se respetan la utilización del lenguaje inclusivo y las diversas formas de expresión que cada persona ha elegido para su colaboración.

Publicado en junio de 2024, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Contenido

04

Editorial. Activar los resortes para proteger a quienes defienden el ambiente
Por FARN

06

Salinas Grandes, la Puna que resiste el desembarco de la minería del litio
Por Emilia Delfino

10

Recuperación del Riachuelo: un avance en superficie y un peligro que subyace bajo las aguas contaminadas
Por Jesús Allende

14

Memorias de una exploradora de glaciares
Por Facundo García

18

“Nos estamos secando”: la lucha de un pueblo sanjuanino por el agua
Por Agustina López

22

La actividad petrolera que alteró para siempre la vida en una comunidad mapuche
Por Emiliano Ortiz

26

Defender el ambiente: un ejercicio democrático que lleva tiempo y es aprendizaje
Por Vanina Lombardi

29

Un proyecto petrolero amenaza al golfo San Matías a casi 25 años de la histórica ley que protegió sus costas
Por Iván Hojman

32

Con la flora nativa como bandera
Por Jorgelina Hiba

36

Reciclar, resistir, revolucionar: el movimiento cartonero de Rosario
Por Juan Chiummiento



INFORME AMBIENTAL 2024

FARN
FUNDACIÓN AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

¡Ya está disponible el IAF 2024!

INFORME AMBIENTAL 2024

Contra la corriente

Perspectivas para garantizar
el derecho al ambiente sano



— Ilustración por
Florencia Gavilán

EDITORIAL FARN

Activar los resortes para proteger a quienes defienden el ambiente

04

Nº 22 — JUNIO 2024

Nº 22

Para defender el suelo, el agua, la biodiversidad, los bosques nativos, los glaciares, los humedales, los ríos, el mar, las turberas, los acuíferos, las montañas, los paisajes, los valores culturales y la naturaleza, es necesario asegurar los derechos de las personas y comunidades que trabajan y le ponen el cuerpo a las luchas sociales y ambientales de nuestro tiempo. Y para que se ejerzan plenamente los derechos ambientales es imprescindible proteger sus derechos a la vida, a la salud y a la seguridad. Pero ¿quiénes son las personas defensoras del ambiente?

El 8 de marzo de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Este texto, también conocido como **Declaración sobre los defensores de los derechos humanos** identifica en sus principios a los defensores de los derechos humanos como individuos o grupos que actúan para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos. Siguiendo esta definición, cualquier persona o grupo que se esfuerce por promover los derechos humanos, desde organizaciones asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta quienes trabajan en sus comunidades locales, pueden ser considerados defensores.

En esta dirección, debemos adoptar una definición de “persona defensora del ambiente” lo más amplia posible. Una definición que, desde luego, abarque a las comunidades indígenas y a quienes son activistas ambientales, pero también a científicos y científicas, bomberos, guardaparques, guías de turismo, asambleas ciudadanas, vecinos y vecinas, recicladores urbanos, abogados y abogadas, miembros de ONG, periodistas, deportistas, artistas y docentes, entre otros. Una definición elástica que permita ampliar el umbral de protección al nivel máximo.

América Latina es una de las regiones más peligrosas para las personas defensoras del ambiente. A nivel local, recordemos que en 2023 **la reforma constitucional impuesta en la provincia de Jujuy** violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, y el acceso a la Justicia. Además, no aseguró que las y los defensores ambientales tuvieran un espacio adecuado

para el ejercicio de sus derechos ni la debida protección, como lo establece el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. **Las manifestaciones públicas de comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia** que se organizaron en contra de esa reforma continuaron durante días y fueron reprimidas por la policía provincial, con un saldo significativo de detenidos y heridos.

En un contexto de retrocesos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la tarea de quienes defienden los derechos de la sociedad entera deviene crucial. Por ello, deben utilizarse todos los resortes disponibles para protegerlos.

En ocasiones, la primera línea de defensa para los defensores es que se los identifique a través de grupos o asambleas y no individualmente. Sin embargo, muchas veces la propia dinámica de las luchas colectivas lleva a la aparición de referentes con nombre y apellido. En esos casos, es importante conocer sus historias, no solo como fuente de inspiración, sino también como escudo protector frente a ataques estatales o corporativos.

A lo largo y a lo ancho del territorio argentino, desde Salinas Grandes al golfo San Matías, pasando por Jáchal, el Riachuelo, Mendoza, Santa Fe, Mar del Plata y la pequeña localidad neuquina de Sauzal Bonito, encontramos historias inspiradoras de hombres y mujeres, comunidades y asambleas, que cumplen un rol fundamental como defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En este sentido, el Acuerdo de Escazú establece que los Estados deben garantizar un entorno seguro, sin amenazas, intimidaciones, inseguridad ni restricciones a la libertad de expresión ni a los derechos de reunión y asociación pacífica, entre otros. Para que este Acuerdo sea efectivo y no se diluya en una mera expresión de deseos, debe asegurarse su implementación total en los territorios. Allí, se encuentra en juego la protección de los más diversos ecosistemas.

No es posible defender a quienes no conocemos. Por eso, para amparar entre todos a las personas que luchan por los derechos humanos, del ambiente, del clima y de la biósfera, te invitamos a conocerlas en esta edición de Pulso Ambiental.

**Emilia Delfino**

Periodista de investigación, enfocada en corrupción gubernamental y corporativa, abuso de poder y conflictos socioambientales. Cubre casos judiciales. Escribe en la sección Política de *elDiarioAR* y antes trabajó en *CNN en Español* y *Diario Perfil*. Alumna del Oxford Climate Journalism Network 2023 y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Salinas Grandes, la Puna que resiste el desembarco de la minería del litio

06

En el territorio que se extiende alrededor de la cuenca de este gran salar que comparten las provincias de Salta y Jujuy, un bloque de comunidades logró frenar durante los últimos 14 años gran parte del avance de las mineras que pretenden extraer el “oro blanco”. La oposición a la explotación del litio alrededor de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc unió a las poblaciones kollas y demostró que están dispuestas a defender el ambiente que habitan.

Aquello que las Salinas Grandes y su cuenca significan para los defensores ambientales y comunidades de la Puna jujeña puede resumirse en pocas palabras. Madre. Agua. Trabajo. Prosperidad. Sagrada. Historia. Sal. Patrimonio. Fuente de vida. Admiración.

Este salar, considerado una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, está en disputa. Desde 2010, unas 38 comunidades indígenas se oponen a la explotación del litio en esta cuenca endorreica compartida por las provincias de Jujuy y Salta. A pesar de las demandas judiciales, la intervención de la Corte Suprema de la Nación y los reclamos a las gobernaciones y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), los proyectos siguen en marcha. Los habitantes de este territorio salado, de este oasis en el desierto, han visto cómo la mi-

nería del litio penetró en los últimos meses, logrando el consenso de al menos tres comunidades de aquel bloque originario que se opuso a la exploración y explotación del mineral considerado el “oro blanco”.

En Jujuy se siente el miedo. Fue difícil hallar voces en alto sobre el conflicto por las salinas y el litio en febrero de 2024, en el contexto de las detenciones de Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas, acusados de los delitos de “lesiones psicológicas leves en contexto de violencia de género y de tornar incierta la identidad de un menor de diez años”, tras *twittear* sobre la esposa del exgobernador Gerardo Morales¹.

1. El presente artículo fue elaborado luego de un viaje realizado a la Puna de la provincia de Jujuy entre los días 23 y 25 de febrero del 2024.



En Salinas Grandes, unas 38 comunidades indígenas se oponen a la explotación del litio.

Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc ubicada en el departamento Tumbaya, a 3600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi. Flores, uno de los defensores ambientales de este territorio, es de los pocos que accede a dar su nombre para esta nota.

Cuenta que el conflicto por el litio hizo mucho más que unir a un grupo de 38 comunidades. “Nos ayudó a recuperar nuestra identidad. Si no hubiese nacido esta preocupación, cada comunidad seguía por su lado. Nos ayudó a despertar”, asegura Flores.

El dirigente afirma, además, que las comunidades no están dispuestas a convertir su territorio en una zona de sacrificio para que el Norte Global cumpla con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. “No vamos a destruir toda la naturaleza de la Puna para ‘salvar al mundo’ con autos eléctricos”, asevera. Para Flores, las salinas son fuente de vida y patrimonio, no de litio para las baterías de los vehículos de los países más ricos.

Poblaciones organizadas mediante la economía comunitaria

Salinas Grandes es mucho más que un salar. Aquí se extiende una cuenca endorreica, cerrada, que no solo es fuente de litio. Es fuente de agua y de sal. También de trabajo. Pero no del que intentan imponer las mineras y la gobernación. Aquí funciona la economía comunitaria, una forma distinta de organización que implementan algunas de las comunidades indígenas. Santuario de Tres Pozos es una de ellas, ubicada a 145 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de subir la Cuesta de Lipán y a pocos kilómetros del gran salar.

El turismo en las Salinas Grandes se organiza por sectores: algunas comunidades, las más cercanas y organizadas, ocupan diferentes porciones del salar para su explotación turística. Trabajan por turnos, en general día por medio, y los jóvenes son capacitados por la propia comunidad para ejercer como guías. Las ganancias se dividen entre salarios e ingresos comunitarios, explica uno de los 40 guías de Santuario de Tres Pozos que recibe a

los turistas a la vera del salar, donde proliferan los carteles contra el litio y la minería. Prefiere que su nombre no figure en esta nota.

Su madre es vendedora en un puesto de artesanías de sal en las salinas desde hace unos tres años y afirma que sus hijos deben “ocupar el territorio”, en el sentido más amplio de la frase: volver a los orígenes de su comunidad, el pastoreo de llamas y cabras, la agricultura. A estar en la tierra que las mineras tanto codician y que la mayoría de las comunidades se niega, por ahora, a ceder. Para la mujer, las salinas son fuente de trabajo. Pide anonimato.

Otra guía turística y exdirigente indígena proveniente de la comunidad de San Miguel de Colorados también solicita resguardar su identidad. Ha disputado durante años contra el litio y la llegada de las mineras a las salinas. Para ella, las salinas son sagradas, un regalo del Padre celestial. Cree que las comunidades de Salinas Grandes deben mantenerse unidas y organizadas para seguir frenando el avance silencioso de la minería del litio. José Luis, uno de sus colegas, coincide y asegura: “El litio es pan para hoy y hambre para mañana”.

“No vamos a destruir toda la naturaleza de la Puna para ‘salvar al mundo’ con autos eléctricos”, asevera Clemente Flores, un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno.

Desde 2010, 38 comunidades indígenas se oponen a la explotación del litio en la cuenca endorreica de Salinas Grandes, compartida por las provincias de Jujuy y Salta.

Este gran salar también es fuente de trabajo para una histórica cooperativa de sal, fundada por dirigentes indígenas de Santuario de Tres Pozos. Salinas Grandes es prosperidad. Uno de los trabajadores más antiguos lleva unos 30 años viviendo de esta actividad. “Salinas Grandes es historia, es una madre”, dice. Aquí trabajan distintas generaciones extrayendo la sal para usos industriales, consumo animal y humano. El último año hubo pocas lluvias y eso repercutirá en la producción de sal de arrastre —utilizada para industrias como la producción de papel—, asegura el trabajador, que pide resguardar su nombre. La posibilidad de que las mineras comiencen a utilizar el agua de la cuenca para la explotación del litio es una amenaza a su fuente de trabajo. Sin agua, no hay sal de arrastre.

El gobierno jujeño concesionó varias áreas de Salinas Grandes a las mineras y dos de ellas ya se encuentran trabajando en la zona: Litica (de Pluspetrol) y Lithion Energy (antes conocida como Lithos y propiedad de Pan American Energy). Ambas empresas consiguieron el aval de tres comunidades (Lipán, Sausalito y Quera y Agua Caliente) para comenzar la búsqueda de litio en las salinas en sus territorios comunitarios. En estos tres pueblos de la cuenca de Salinas Grandes, una parte de la población decidió abrirse del bloque y acordar por separado con las empresas y el gobierno de Jujuy. *Pulso Ambiental* se comunicó con la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos y con el Ministerio de Ambiente de la provincia para conocer su posición sobre el conflicto con las comunidades pero no recibió respuesta.



Este salar, ubicado en las provincias de Jujuy y Salta, es considerado una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina.



Dentro de Salinas Grandes funciona la economía comunitaria, llevada adelante a través del turismo, la artesanía y una cooperativa de sal.

Iber Sarapura tiene 24 años y vive en la comunidad de Alfarcito, un pueblo kolla del territorio de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc que debe su nombre al cultivo de alfalfa. Se encuentra ubicado a unos 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 3363 metros sobre el nivel del mar.

“Para mí, la cuenca es admiración”, enfatiza. Admiración por la organización que las comunidades han desarrollado en los últimos 14 años. “Hay un espacio que demostró lucha y resistencia, que pudo demostrar que las comunidades sí nos podemos organizar, sí podemos luchar, sí podemos resistir. Y sí podemos decir ‘no’ cuando nos están atropellando, cuando quieren violar derechos, cuando nos quieren matar”, enfatiza.

“El litio es muerte”, afirma Sarapura. “Lo único que hace es asegurarnos que el día de mañana no tengamos agua”.

En Alfarcito, la población no quiere trabajo de las mineras. Tiene su propia economía comunitaria: un criadero de truchas, producción de tejidos, posadas turísticas, cría de llamas y ovejas. “Aquí vivimos bien, no necesitamos más”, asegura.



Jesús Allende

Abogado especialista en derecho penal, graduado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella y periodista de la sección Sociedad del diario *La Nación*. Premiado por ADEPA en las categorías “Solidaridad Social” (2022) y “Periodismo Judicial” (2023), esta última otorgada por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Recuperación del Riachuelo: un avance en superficie y un peligro que subyace bajo las aguas contaminadas

10

A pesar de las mejoras visibles, persiste la contaminación del agua y el aire que afecta a 4,5 millones de habitantes. Los alcances del fallo Mendoza, que en 2008 condenó al Estado por daño ambiental, resultaron insuficientes hasta el momento. Los expertos señalan que para recuperar la Cuenca Matanza Riachuelo se necesita un enfoque integral, así como un trabajo interjurisdiccional y mayor control sobre las empresas y agentes contaminantes.

Las condiciones del día son óptimas para navegar por el cauce del Riachuelo. Dos semanas ininterrumpidas de tormentas dieron lugar a un remanso meteorológico, con sol y cielo despejado, que permite que la lancha navegue entre la desembocadura del Río de La Plata y el puente Bosch. El viento suave desplaza el olor de la superficie, lo vuelve casi imperceptible, y el espejo de agua está claro. La crecida, alimentada por días consecutivos de lluvia, le da suficiente calado a la nave para surcar sin complicaciones el río de llanura, la frontera natural que separa en sus orillas a la ciudad de la provincia de Buenos Aires.

En su paso atraviesa el puente transbordador Nicolás Avellaneda y bordea Isla Maciel y Caminito. Luego navega bajo el puente ferroviario Barraca Peña y se adentra en una postal fabril intercalada por históricos barrios bo-

naerenses y porteños, asentamientos populares, fábricas activas y otras abandonadas, silos y depósitos. En “ollas flotantes” —que funcionan de basureros— los plásticos quedan atrapados y las grúas de pala apostadas en los márgenes de la ribera levantan los residuos, para soltarlos en contenedores metálicos. Sobre el agua, los catamaranes barredores trabajan arduamente para recolectar los desechos superficiales que transporta la corriente.

Hace 16 años, proyectar alguna de estas escenas en la sección baja de la Cuenca Matanza Riachuelo habría sido inimaginable. El cauce, a la altura de la desembocadura, era un tapón coagulado por la chatarra de automóviles desguazados y los cascos de barcos hundidos en lodazales aceitosos, que la acumulación de desperdicios había transformado en basurales acuáticos de emanaciones fétidas e irrespirables.

JUNIO 2024

N° 22



La Cuenca Matanza Riachuelo abarca 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y nueve comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El panorama estético indudablemente cambió. Sin embargo, este tramo —navegable tan solo mediante autorización— es un minúsculo recorte de la extensión total que abarca la Cuenca en los 64 kilómetros polutos de su curso hídrico, del que se desprenden y ramifican cientos de arroyos densamente poblados a su alrededor. La deuda por sanear uno de los focos de contaminación más grandes de la Argentina todavía permanece pendiente.

En su territorio habitan 4,5 millones de personas, es decir uno de cada diez argentinos vive donde los parámetros de calidad del agua y el aire son de inhabitabilidad. Queda un largo camino para revertir la situación, aunque el punto de partida no está en cero. Y esto se consiguió en gran parte debido a la acción de los defensores ambientales, aquellos que dedicaron años de trabajo a la protección del medioambiente en la Cuenca y a su saneamiento, además de lograr que hoy exista un conocimiento más profundo del valor de su ecosistema.

A bordo de la lancha viaja uno de ellos, Alfredo Alberti, vecino y presidente de la Asociación Vecinal de la Boca. “El cambio que se ve en el Riachuelo es notorio”, dice Alberti cuando la embarcación alcanza uno de los obradores de

la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a cargo del saneamiento. “Hace 25 años que defendemos la Cuenca, desde cuando no se podían navegar más de 50 metros sin frenar porque se recalentaba el motor con tanta basura que se enganchaba en las hélices. Hoy la contaminación visual está totalmente superada y el olor fétido que había no existe más, pero todo limitado a lo que referimos como la cosmética del Riachuelo, simplemente lo visual”, agrega.

Fallo Mendoza, un antes y un después

Alberti fue uno de los impulsores del fallo Mendoza de la Corte Suprema, que en 2008 condenó al Estado nacional y a los gobiernos de la provincia y de la ciudad por daño ambiental, los exhortó a realizar políticas que recuperen la zona, y encargó también a ACUMAR la responsabilidad del saneamiento. Por su lado, la Asociación Vecinal de La Boca, FARN, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) fueron designados por la Justicia como parte del Cuerpo Colegiado que hoy monitorea y audita los avances.



A pesar de los avances, la Cuenca Matanza Riachuelo continúa siendo uno de los focos de contaminación más grandes de la Argentina.

Sobre el cumplimiento de la sentencia, Alberti aclara: “La calidad del agua y el aire sigue igual que antes del fallo, o peor. No hubo ningún avance en los parámetros, porque las industrias siguen vertiendo los químicos en el cauce. El 80% de la contaminación es cloacal, mientras que el 20%, que enferma y mata, es industrial”.

Por su parte, Raúl Estrada Oyuela, presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, experto en asuntos ambientales y representante legal de la Asociación de Vecinos de La Boca como parte del Cuerpo Colegiado, amplía su postura sobre los avances y retrocesos en la contaminación: “La cuenca baja del Riachuelo estaba plagada de barcos hundidos y chatarra. Todo eso se levantó, se quitó la basura y parte del camino de sirga se despejó con relocalizaciones de viviendas, y en las barrancas de las orillas volvió a crecer el pasto”, dice Estrada Oyuela.

Y agrega: “La sensación visual es mejor, pero el problema es todo lo que subyace y aquello que no se ve. La medición del agua de 2008, comparada con muestras de 2024, empeoró. Aumentó la contaminación de las aguas superficiales y la presencia de benceno en el aire, un tóxico generador de cáncer, está muy por encima de lo tolerable”.

El diagnóstico de Estrada Oyuela es que la calidad del aire en la Cuenca es peor que la de cualquier región del país.

“No hay límites establecidos para la emisión de gases de las industrias y las sanciones por incumplimiento son bajas. Para las empresas es más barato pagar una multa por contaminar que solucionar el problema”, señala.

Desafíos habitacionales

La mayor complejidad en el abordaje del saneamiento del Riachuelo radica en que cada sección de la Cuenca (baja, media y alta) encierra su problemática singular. El territorio abarca una totalidad de 14 municipios y nueve comunas, dentro de los que se incluyen más de 600 barrios populares emplazados en tierras con escasa infraestructura y que están sobrepoblados.

Para Carla Fainstein, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y especialista en políticas habitacionales, con trabajos enfocados en el estudio de los conflictos sociales en la Cuenca, como las relocalizaciones de los asentamientos de las villas 21 y 24 y la judicialización de los reasentamientos de viviendas sobre el camino de sirga a orillas del Riachuelo, es necesario entender a la Cuenca en su integridad, sin desatender a ninguna de las secciones, porque la contaminación de cada una influye en la otra. La investigadora señala que el saneamiento no será posible mientras no se articulen las políticas ambientales con las habitacionales.

“En la Cuenca alta están los partidos con zonas rurales donde se está dando la expansión urbana más fuerte, no solo de asentamientos, sino también por urbanizaciones privadas de desarrollos inmobiliarios que traen consecuencias ambientales. Otro gran problema allí son los agrotóxicos derivados de la actividad rural. En la Cuenca media hay áreas mixtas, entre urbanas y rurales, y en la baja áreas densamente pobladas con asentamientos en la ribera pegados a industrias hipercontaminantes”, explica Fainstein.

La especialista advierte sobre la necesidad de rediseñar los ejes del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que funciona como hoja de ruta de las acciones de ACUMAR, a los efectos de individualizar las problemáticas propias de cada sección. Por otro lado, destaca el nivel y volumen de información que generó ACUMAR a partir del fallo que permitió conocer aspectos desconocidos sobre de la salud del Riachuelo y su territorio, y categorizar el riesgo ambiental en diferentes barrios.

“Un eje central tiene que ser el trabajo interjurisdiccional real. Existe un problema de comunicación entre los municipios por la heterogeneidad que hay entre los gobiernos municipales. También falta mejorar y revisar los mecanismo de control y fiscalización de los agentes contaminantes, y buscar métodos para que verdaderamente las industrias que contaminan reaccionen a lo que el Estado les ordena y que se cumpla uno de los objetivos del fallo de mejorar la calidad de vida de quienes habitan la Cuenca”, concluye Fainstein.

La deuda por sanear uno de los focos de contaminación más grandes de la Argentina todavía permanece pendiente.

La lucha vigente

Cuando la lancha alcanza el puente Bosch, se detiene porque la crecida del agua no permite pasar por debajo. Emprende la vuelta rumbo a La Boca y Alberti reflexiona sobre los últimos 25 años dedicados a la protección de la Cuenca. “La lucha no fue en vano y estamos orgullosos de formar parte del Cuerpo Colegiado, donde trabajamos en equipo con otras instituciones de prestigio”, dice.

Al regreso, Alberti desciende de la embarcación por la pasarela que conecta con Vuelta de Rocha, Caminito, y a su lado asoma un suculento cardumen de peces plateados que nada junto a una olla flotante. La primera reacción es pensar que la aparición de la fauna acuática es un símbolo de recuperación del ecosistema, pero Alberti advierte que la escena es engañosa y explica que son peces que ingresaron del Río de la Plata por la tormenta. “Quedaron en una trampa letal. No hay oxígeno en el agua y en un par de horas van a estar muertos. Lo que enferma el Riachuelo todavía no se pudo frenar. No alcanza con lo que se hizo hasta acá y por eso hay que seguir luchando. Hoy la cuenca baja por fuera parece linda y florida, mientras que se pudre por dentro”.

“No hay límites establecidos para la emisión de gases de las industrias y para las empresas es más barato pagar una multa que solucionar el problema”, señala Estrada Oyuela.



Facundo García

Periodista. En 2014 cruzó África por tierra y a partir de esas vivencias escribió el libro *Preguntas de los elefantes*, editado por la Universidad Nacional de Cuyo. Luego publicó *Era esto o poner bombas* (Ediciones del Retortuño), una colección de textos del periodo 2005-2020. En Instagram es @facundux.

Memorias de una exploradora de glaciares



La geógrafa Laura Zalazar participó de la mayoría de las alrededor de 40 expediciones que se hicieron para completar el Inventario Nacional de Glaciares de la Argentina. Desde la perspectiva única que le aporta su experiencia de campo advierte que “es necesario discutir quién se quedará con el agua y cómo la vamos a distribuir”. En esta nota compartimos una síntesis de su lucha por cuidar un recurso estratégico.

Crédito fotográfico: Laura Zalazar.

Laura Zalazar habla y algo en su voz suena igual a las montañas. Hay una veta de tesón, de firmeza. Tal vez porque esta geógrafa de 55 años es coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares y se pasó la última década recorriendo los Andes argentinos en busca de recursos que están más amenazados que nunca. Ese paisaje forma parte de su identidad.

A lo mejor de ahí le viene el tono pausado, y también la preocupación. Al cierre de esta nota (mayo de 2024), nadie le había confirmado si se seguirán destinando fondos públicos para el inventario: su trabajo flotaba en la incertidumbre como un iceberg a la deriva.

Nació en un barrio popular de Guaymallén (Mendoza), de padre empleado y madre costurera. “Todo el día sonaba la máquina de coser de mi mamá”, evoca Laura al hablar de su infancia. La educación pública le permitió convertirse en científica y especializarse en cartografía satelital mediante una beca que la llevó por Inglaterra, Holanda y Suecia.

¿Un camino atípico? Puede ser. Pero todo cobró sentido cuando la investigadora entrelazó su vida con esos gigantes que están derritiéndose y hoy la desvelan.

El atlas que nadie había hecho

De unas 40 expediciones que se han realizado para completar el [inventario de glaciares argentinos](#), Laura participó de más de 30. Por zonas agrestes, en altura, con vientos, con frío. Una tarea titánica.

Nunca en la historia del país se había encarado algo así. “Antes del inventario solo existían estudios parciales, pero no teníamos un mapa diseñado con la misma metodología, de forma que pudiéramos comparar las conclusiones de una zona con respecto a las de otras”, aporta.

La [Ley Nacional 26.639](#), conocida como Ley de Glaciares, fue sancionada el 30 de septiembre de 2010. Definió un régimen de presupuestos mínimos y estipuló que el inventario debe actualizarse cada cinco años a través de estudios del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, actualmente rebajado a Subsecretaría.

En consecuencia, entre 2012 y 2017 Laura atravesó ríos gélidos a caballo o a pie, conversando con paisanos, durmiendo campo adentro y abriendo tranqueras suspendidas entre la neblina.

Durante aquellos inviernos, ella y su equipo elaboraron mapas en base a imágenes satelitales, y durante los veranos las validaron eligiendo puntos específicos. La idea era verificar si lo que mostraban las fotos desde el espacio coincidía con lo que yacía en la superficie de la Tierra.

“En ese proceso, aprendimos que no había un solo tipo de glaciar y que existen cuerpos como los glaciares de escombros, en los que a simple vista no se ve el blanco, sino manifestaciones de que el hielo está abajo”, reconoce la experta. “A veces hay que andar durante días, contratar guías o baqueanos. En el sur podés tener lagos y bosques alrededor; y en Mendoza o San Juan los glaciares suelen ubicarse bien alto, generalmente rodeados de un entorno muy duro”.

¿Vive alguien cerca de los glaciares? Depende. “En el norte —cuenta la geógrafa— se habla con las comunidades que habitan ahí y se les pide permiso para acercarse. En cambio, en la Patagonia muchas veces te toca averiguar quién es el dueño de la estancia al que hay que pedirle autorización”.

En 2018 se presentó la primera edición del inventario. Con ello, se protegía a 16.968 cuerpos de hielo de la contaminación, la construcción de obras que pudieran alterarlos, la exploración y explotación minera y la instalación de industrias. Pocos imaginaron el futuro que venía.

“Antes del inventario no existía un mapa diseñado con la misma metodología que permitiera comparar las conclusiones de una zona con respecto a las de otras”, afirma Zalazar.

El clima social también cambia

Al compás del cambio climático, otro tipo de inclemencias se hizo sentir durante los últimos tiempos y la ciencia sintió el golpe. El itinerario de Laura Zalazar muestra que hay muchas formas de hostigar a los defensores del ambiente. A veces, con modos más sutiles que la violencia directa.

Cuando se desestima la evidencia —o se desvaloriza con un *tuit* irónico el rol de personas que lo dieron todo por especializarse en un campo del conocimiento— se hace un daño que no aparece en las estadísticas criminales, pero conlleva consecuencias concretas. La primera es el recorte de fondos.

“Nuestro trabajo es financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Por lo tanto, nos encontramos dentro del marco general del país en estos asuntos. De hecho, ya hubo un intento de modificar la legislación en el primer proyecto de la llamada Ley Ómnibus que envió el nuevo Gobierno nacional al Congreso. Su objetivo era dejar afuera de la protección a algunos glaciares”, explica.

Básicamente, el proyecto que el presidente Javier Milei impulsó en enero incluía la modificación de los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 26.639, de forma que la superficie bajo cuidado quedaba bastante restringida, dejando en riesgo a una gran cantidad de los miles de cuerpos de hielo que están esparcidos por la cordillera argentina.

Quedaban afuera, por ejemplo, los glaciares de escombros inactivos, es decir, las formaciones que no presentan movimiento actual pendiente abajo pero todavía contienen hielo en su interior. Asimismo, se desprotegía a las formaciones que abarcaran menos de una hectárea, entre otras condiciones.

Al final, el cambio que pretendía el Ejecutivo fue postergado. Pero nadie sabe hasta cuándo y el motivo es claro: hay glaciares que “obstaculizan” el desarrollo de negocios privados.

En noviembre de 2023, el IANIGLA presentó la primera actualización del inventario correspondiente a la zona noroeste de la Argentina. Laura explica: “Para poder publicar tenemos que cumplir con un procedimiento administrativo y nos deben dar el okey desde Nación. Todavía estamos aguardando eso”.

Pero han pasado casi seis meses.



Laura Zalazar en la actualidad. La científica tiene 55 años, vive en Mendoza y trabaja en el IANIGLA.

En el primer proyecto de la llamada Ley Ómnibus que envió el nuevo Gobierno al Congreso nacional se buscaba dejar afuera de la protección a algunos glaciares.



El trabajo de Laura incluye largos viajes, a veces a pie y otras a caballo o en mula.

Los glaciares, el agua y más allá

Ya casi ningún ser humano se toma dos o tres minutos para mirar con paciencia a los copos de nieve. Cada uno está formado por millones de cristales de hielo de seis puntas con forma de estrella, unidos a través de una precisa combinación geométrica que jamás se repite.

Si eso llama la atención, cómo no asombrarse de que los cristales que componen la arquitectura secreta de los copos se acumulen, a su vez, a lo largo de miles o millones de años para formar esas catedrales de la naturaleza que son los glaciares. El prodigio roza la magia.

Pero no es una época de magia ni de ciencia, sino de apuros, pantallas y distracciones. Y los glaciares lo sufren. Desde 1986 hasta la actualidad, Laura viene siguiendo con especial detalle la evolución de estas formaciones en los Andes centrales. Asegura que la disminución del área que ocupan ronda el 40%. Y eso representa una amenaza directa para las reservas de agua dulce en la árida región.

Por otra parte, los glaciares son solo un elemento dentro de la sinfonía que compone cada día la cordillera.

“La montaña es un sistema —insiste Zalazar—. Nuestra ley protege a los glaciares pero estamos hablando de entornos donde se hallan además los humedales, los arroyos, las vegas, el agua subterránea... todos esos otros espacios están más expuestos todavía”.

Se trata, en definitiva, de valorar al agua como recurso estratégico. “Está cambiando el ciclo hidrológico, eso es notorio. Entonces, aparte de estudiar la disponibilidad es necesario discutir quién se quedará con el agua y cómo la vamos a distribuir”, resume Laura.

El reloj corre. Los glaciares se caen a pedazos. Ojalá el debate se salde a tiempo.



Agustina López

Periodista ambiental. Trabajó en *La Nación*, *A24* y desde 2020 es editora en *TN*.
Autora de *Darwin, una historia de Malvinas* (Galerna).

“Nos estamos secando”: la lucha de un pueblo sanjuanino por el agua



Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea Jáchal no se toca.

A raíz de los derrames de cianuro de la mina Veladero que envenenaron el río de Jáchal en 2015 se conformó la Asamblea Jáchal no se toca. Sus miembros pelean por desterrar la actividad minera de la provincia. La nueva amenaza es el proyecto Josemaría, que podría agotar aun más los recursos hídricos de la región.



Marcha en reclamo por el primer derrame de la mina Veladero, en 2015. Crédito fotográfico: Asamblea Jáchal no se toca.

“Jáchal va a desaparecer, se va a secar. Hace rato que sentimos que somos una zona de sacrificio”, dice Carolina Caliva en una charla con sus compañeros de la Asamblea Jáchal no se toca. Es viernes por la tarde y se juntaron, como siempre, en la carpa de lona azul que tienen montada en la plaza de este pueblo¹.

Desde 2015 esta agrupación de San Juan, que se creó para luchar contra la contaminación de la megaminería, pelea para cuidar lo más valioso en este pueblo de 25.000 habitantes a dos horas de la capital provincial: el agua.

Si bien surgió en febrero de 2015 con el propósito (que cumplieron) de evitar que se instalara la mina de la empresa Latín Uranium en La Ciénaga, un área protegida en Jáchal, la asamblea cobró notoriedad nacional en septiembre de ese año. Fue cuando la mina Veladero, de la canadiense Barrick Gold, tuvo un derrame que vertió millones de litros de agua con cianuro y mercurio al cauce del río que alimenta al pueblo. Ese hecho marcó la peor catástrofe minera de la historia argentina. Sus habitantes se enteraron por un mensaje de texto que envió un empleado a su familia: “No tomen el agua, está contaminada”. No hubo entonces ninguna comunicación oficial.

1. El presente artículo fue elaborado luego de un viaje realizado a Jáchal entre el 14 y el 16 de marzo de 2024.

La megaminería consume miles de litros de agua por segundo, pero el beneficio económico que le deja a San Juan es de apenas el 3% de las regalías que declaran.

“Esa noche en Jáchal no durmió nadie y al día siguiente, en el centro de la plaza, se veía a la gente corriendo desesperada. Había papás con miedo pensando que habían envenenado a sus hijos por darles agua de la canilla”, relata Carolina. Los vecinos que se acercaron en ese entonces a pedir explicaciones a la Municipalidad no obtuvieron respuesta. En 2020 debía empezar el juicio a cinco exfuncionarios por el daño provocado. La fecha se suspendió por la pandemia y todavía no volvió a reprogramarse.

Con el correr de los años y al calor de la lucha, la asamblea fue marcando hitos. Consiguió que la municipalidad de Jáchal tome de forma regular muestras de agua, que luego son analizadas por la Universidad de Cuyo. Así identificaron, al menos, cinco derrames que fueron ocultados por la empresa, en adicional a aquel primero. Pese a que esto sería motivo de cierre definitivo de la mina —el Código de Minería establece el cierre definitivo en caso de tres derrames—, eso nunca pasó.

Los integrantes de la Asamblea se formaron, aprendieron cómo opera una mina, quiénes están detrás de esos intereses, cuáles son sus derechos. Lograron impulsar la pelea legal y también inspirar a otros movimientos defensores del agua alrededor del país. Este último es uno de sus mayores orgullos.

“Nosotros hace tiempo que vivimos todo este panorama, que es muy difícil. Y lo que queremos llevar a distintos departamentos, a distintas provincias, es que no dejen entrar a la minería. Porque una vez que entran, estas empresas son imposibles de sacar. Pero sí se las puede frenar. Entonces ese es el trabajo nuestro. Hay que pensar ‘está bien, me destruyeron mi departamento, pero que no destruyan otros’. Para nosotros, ir generando movimiento, que otras provincias luchen, es un halago”, explica Faustino Esquivel, otro miembro de la Asamblea. Recuerda que lo arrestaron durante una de las protestas en el centro de la plaza de Jáchal por llevar un cartel que decía: “El agua vale más que el oro”.

La crisis como excusa

La megaminería se instaló en San Juan a principios de los 2000, en un momento de crisis económica de la Argentina. La promesa de ese entonces, coinciden los miembros de la Asamblea, era demasiado buena para rechazarla: trabajo bien pago y el reaseguro permanente de que ninguna actividad minera iba a afectar el agua. También dádivas: una camioneta para algún vecino, animales para un agricultor, la construcción de un hospital y hasta fondos para un proyecto escolar. Migajas a cambio de los miles de litros de agua que consumen por segundo las mineras para su actividad y del beneficio económico que le dejan a la provincia, de apenas el 3% de las regalías que declaran.

“El Estado delega en la minera acciones que debe cumplir para así obtener una licencia social y habilitar esta actividad, que es desastrosa. No solo acá, sino en todas partes del mundo. Licencia social que no tienen, porque acá quisimos hacer tres consultas populares y siempre nos rechazaron”, marca el asambleísta Saúl Zeballos.

Todos los integrantes de la Asamblea reconocen que en algún momento fueron perseguidos por el poder político, que avala a la megaminería: a algunos los llamaron para amenazarlos, a otros los detuvieron, a sus familias les cuesta conseguir trabajo. Pero también admiten que, aunque sea desde el anonimato, el pueblo los apoya;

Una parte de las operaciones del proyecto Josemaría se haría en un área glacial y periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares que continúa vigente.

siempre que hacen una colecta los vecinos aportan o les donan comida si van a hacer alguna peregrinación, como la bicicleteada que organizaron desde Jáchal a Buenos Aires en 2018 en defensa de la Ley de Glaciares.

Es que es imposible ignorar el impacto que la minería provocó en el pueblo: el río Jáchal apenas se adivina entre las piedras redondeadas que forman el lecho. Su caudal es débil, perezoso. “Acá antes se podía hacer *rafting*”, recuerda Saúl. Hoy, el río podría cruzarse caminando.

Con la intensa demanda de agua de la minería y la menor intensidad de las nevadas producto del cambio climático, cada vez hay menos agua en Jáchal. De hecho, el Gobierno la raciona para la agricultura: al principio la cortaba 42 días al año, a través del manejo de las compuertas del dique Cuesta del Viento, ubicado en las afueras del pueblo. En la actualidad se corta cuatro meses por año. “La minería es una política de Estado porque es lo que está necesitando el mundo”, aseguró en marzo el gobernador Marcelo Orrego en una feria de minería en Canadá.

“Yo estoy convencido de que Jáchal en ocho o diez años se seca, y eso sería el fin para nosotros”, cuenta un agricultor. El llanto se le traba en la garganta y la voz sale entrecortada. “Yo soy cuarta generación de agricultores, no

sé hacer otra cosa". No quiere dar su nombre porque teme represalias. En su campo cultiva cebolla, membrillo y alfalfa, pero cada vez con más dificultad. "Antes teníamos más fruta, pero fuimos cambiando a la alfalfa porque ya no da los mismos rendimientos que antes. Llega menos agua y más salada, los membrillos crecen con una aureola amarilla", grafica.

Hay alrededor de mil agricultores en el valle de Jáchal que están en riesgo. Los que pueden, ya están averiguando para trasladarse a otra provincia y empezar de nuevo. Otros se resignan o buscan empleo en la minería.

El proyecto minero más grande del país estará en San Juan

En los últimos meses, la Asamblea y Jáchal en conjunto sufrieron tres golpes duros. El primero ocurrió en marzo, cuando se confirmó que la minera Veladero seguirá operando al menos por diez años más.

Durante el verano, el Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley Ómnibus una agresiva modificación a la Ley de Glaciares que, de aprobarse, permitirá la explotación minera sobre los glaciares y el ambiente periglacial, arriesgando así las pocas fuentes de agua dulce que quedan en la provincia. Si bien por el momento se dio marcha atrás y la nueva versión del proyecto de ley no incluye cambios a la Ley de Glaciares, en el pueblo lo toman como una declaración de principios y creen que no va a faltar oportunidad para volver sobre el tema.

El último fue la instalación de Josemaría, un nuevo proyecto minero a cielo abierto de la empresa canadiense Lundin Mining para explotar cobre. Después de 20 años de exploración, Josemaría está a un paso de empezar a construir y luego extraer. Será el proyecto minero más grande de la Argentina y estiman que estará activo durante 19 años. Utilizará, según datos preliminares, cinco veces más cantidad de agua que Veladero. Cuando cierre, dejará, para siempre, un pozo de residuos (depósito de colas) en la montaña.



"Esta tierra, el agua, es el único lugar que tenemos, no tenemos otra. No podemos permitir que nos revienten", aseguró Faustino Esquivel. Crédito fotográfico: Asamblea Jáchal no se toca.

Lo que falta para que Josemaría se ponga en marcha es la aprobación del estudio de impacto ambiental, que ya fue presentado por la empresa y recibió más de 120 observaciones. Una de las más alarmantes es que la instalación de una parte de las operaciones se haría en un área glaciar y periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares que continúa vigente. Los vecinos no saben cuál es el estado de este estudio, porque ni el gobierno provincial ni la empresa los mantiene informados.

El panorama es desalentador, pero en la Asamblea Jáchal no se toca aseguran que no tienen otra opción más que pelear; no están dispuestos a claudicar.

Quien sintetiza el espíritu de la lucha al cierre de la charla es Faustino. "Esta tierra, el agua, es el único lugar que tenemos, no tenemos otra. No podemos permitir que nos revienten. Tenemos que defender esto a cualquier precio. No está en juego para nosotros el dinero, sino la dignidad. Y vivir tranquilamente".



22

JUNIO 2024

Nº 22

Albino Wirkalew, integrante de la comunidad mapuche.

**Emiliano Ortiz**

Licenciado en Comunicación Social y reportero gráfico. Trabajó en diversos medios de comunicación en Neuquén capital, como *8300* y en el diario *Río Negro*. Actualmente se desempeña en el portal *Minuto Neuquén*.

La actividad petrolera que alteró para siempre la vida de una comunidad mapuche

La comunidad del *lof* Wirkalew de Sauzal Bonito enfrenta las consecuencias devastadoras del *fracking* de los yacimientos de Vaca Muerta y Fortín de Piedra, ubicados en ambos márgenes del río Neuquén. Por los daños constantes producto de la sismicidad inducida, su reclamo básico es que se construyan viviendas antisísmicas para sus integrantes, quienes además enfrentan la contradicción entre continuar con la ganadería ancestral y o sumarse a la actividad petrolera.

Sauzal Bonito es un paraje rural de la provincia de Neuquén situado a unos 100 kilómetros de Neuquén capital, a 40 de Añelo y a 43 de Plaza Huinca por la ruta provincial 17. Unos pocos metros antes de llegar al pueblo, un cartel con los colores de la bandera mapuche indica el desvío para llegar al *lof* de la comunidad Wirkalew.

La huella del camino se achica y comienza a mostrar una serie de bifurcaciones. Cada una de ellas se dirige hacia las pocas casas que se encuentran desperdigadas a varios metros de distancia. En estas casas saltan a la vista las aberturas dañadas y las paredes agrietadas: algunas de las tantas consecuencias de los movimientos sísmicos que comenzaron a manifestarse en el mismo momento en que dio inicio el proceso de extracción de gas y petróleo no convencional en el corazón de Vaca Muerta.

Jovita Wirkalew, la mamá del *lonko* de la comunidad, intenta cerrar la puerta de entrada de su *ruka*, palabra que en idioma *mapudungún* representa una vivienda tradicional de la arquitectura mapuche. “Tengo un problema en la puerta por el asunto del *fracking*”, comenta al desistir de la idea de cerrarla completamente¹.

Aladino Wirkalew, otro integrante de la comunidad, grafica que los sismos se sienten como si fueran un “cañonazo bajo la tierra” y usa esta dramática analogía bélica para describir cómo es su forma de vivir a partir del año 2015. “Para nosotros ha sido muy difícil aguantar tantos movimientos”, añade. “Cuando ellos hacen ese trabajo de *fracking*, es una explosión muy mayor. Mueven las casas, mueven la tierra completa, las piedras caen, se parten como si pusieras una máquina de cortar y se derrumban las bardas”, asegura.

1. Las entrevistas incluidas en el presente artículo fueron realizadas el 13 de abril de 2024.



Jovita Wirkalew. El pedido de la comunidad a la empresa Tecpetrol es que se construyan diez viviendas antisísmicas.

24

Unos siete kilómetros más arriba de donde se sitúan las casas de la comunidad, del otro lado del río Neuquén, se encuentra el área de Fortín de Piedra, el yacimiento que es operado por Techint a través de su empresa subsidiaria Tecpetrol. Se trata de un área de explotación que abarca unos 243 kilómetros cuadrados. Según los datos que suministra la propia **firma**, Fortín de Piedra abastece el 16 por ciento del gas que consume la Argentina, con una producción diaria equivalente a 186.500 barriles.

“Hemos aguantado aproximadamente 430, 435 movimientos”, comenta Aladino. El número coincide con el relevamiento realizado por el Observatorio de Sismicidad Inducida desde 2015.

El **colectivo** creado por el profesor de geografía Javier Grosso, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Guillermo Tamburini y el licenciado en Ciencias Ambientales Miguel Ángel Di Ferdinando, registró más de 400 sismos desde 2015 en toda la formación de Vaca Muerta. En Fortín de Piedra, entre 2019 y 2023 los períodos de hidrofractura coincidieron con los sucesivos períodos de actividad sísmica. El último sismo en Sauzal Bonito fue registrado en febrero de 2024 y, en lo que va de este año, fueron un total de siete.

La comunidad mapuche Wirkalew enfrenta una lucha desigual entre la tradición ancestral y el avance petrolero en Sauzal Bonito.

Los registros de los sismógrafos marcaron variables similares: movimientos superficiales, con un promedio de tres grados de magnitud. Pese a ser poco profundos, sus pobladores perciben la actividad telúrica como si fuese un estallido o una especie de “sacudón”. “Las casas están todas fisuradas”, remarca Wirkalew. “Cuando usted está acá, este techo corre así (mientras realiza un gesto de ondulación con sus manos) y la pared hace esto (desplaza su brazo en línea recta de izquierda a derecha) o así (invierte el gesto de derecha a izquierda)”. También cuenta que durante la actividad sísmica se han caído televisores, entre otros elementos que colgaban o que se encontraban en el espacio más alto de los muebles. Los movimientos suelen comenzar en altas horas de la noche, pero se han dado también en otros horarios.

“Con los estallidos nos mataron una vaca, por las piedras”, dice, y muestra una imagen en su celular del animal postrado bajo las enormes y pesadas rocas que se encontraban cerca del corral. También menciona que la actividad sísmica ocasionó la muerte de la fauna autóctona. Como ejemplo, nombra el caso de las liebres mara que habitan en el campo semidesértico de jarillales. La mara patagónica hace sus cuevas, vive debajo y sale a comer. “Al desmoronarse la tierra se aplastaron las cuevas y quedaron muertas abajo”, dice.

El pedido de la comunidad Wirkalew a la empresa Tecpetrol es que se construyan diez viviendas antisísmicas para reemplazar las que edificó cada familia a costa de su propio esfuerzo y que se agrietaron debido al *fracking*.

Dicotomía entre la ganadería y la actividad petrolera

Una piedra grabada sobre un *chenque* (tumba mapuche) evidencia la existencia de los ancestros mapuches desde 1838. Los nativos de esa tierra inhóspita vivieron de la ganadería y de los cultivos que ella les proporcionaba. La cría de ganado caprino y ovino fue el principal sustento económico, además de la venta de cueros de especies nativas y plumas de choiques.

La actividad ganadera aún se mantiene, pero cada vez es menos sostenible a causa de la sequía que imperó desde la creación de la presa Portezuelo Grande y el lago Los Barreales, a partir de 1972. El espejo de agua artificial inundó la zona de pastoreo y las vertientes naturales que calmaban la sed de los animales.

Desde 1916, con la perforación del primer pozo de Plaza Huincul, la comunidad Wirkalew comenzó a convivir con la producción petrolera. Alejandro Policarpo fue el primer *lonko* de la comunidad cuando esta fue formalmente declarada, en 2010, y cuenta que sus ancestros trasladaban materiales en carro de bueyes desde la estación de Challacó.

“Nosotros nos criamos en el campo hasta cierta edad, cuando dijimos que el campo se estaba poniendo mal”, y argumenta Policarpo: “Somos nueve hermanos y nuestros padre y madre la lucharon para criarnos. Entonces, a cierta edad fuimos a buscar otro porvenir, otro lugar que por lo menos nos permita ayudarlos a ellos y tener un bien para nosotros. Así que empezamos a trabajar en empresas petroleras”.



Sauzal Bonito es un paraje rural de la provincia de Neuquén situado a unos 100 kilómetros de Neuquén capital.

En la actualidad, la mayoría de las personas jóvenes de la comunidad realizan sus labores en la actividad hidrocarbúfera. Es una dicotomía que comparten con todos los habitantes de la provincia de Neuquén: optar por un puesto de trabajo en el petróleo que ofrece los salarios más altos o mantenerse en una actividad más difícil de sostener. “Igualmente nos quejamos por el desastre que nos han hecho en las viviendas”, aclara el dirigente de la comunidad.

Tránsito petrolero y animales sueltos

El auge de Vaca Muerta llevó al campo el ruido y el tránsito permanente que se vive en un contexto urbano. Sobre la ruta provincial 17 se movilizan camiones de carga, camionetas con cuatro tracciones y otros transportes vinculados a la actividad petrolera.

Sobre la calzada no hay cerco perimetral que sirva de protección para los animales sueltos. “Desde el derivado del lago hasta la entrada de Huincul está todo abierto”, menciona Policarpo. Cuando llueve, el agua se acumula en la banquina y los animales se acercan a beber. Y esta presencia de animales sueltos sobre la ruta es una de las causas de los incidentes de tránsito en la provincia de Neuquén durante la noche. “A menos de un kilómetro, llegando a Huincul, también tuvimos un accidente. Uno de la comunidad en la noche agarró un caballo y se le rompió el vehículo. Menos mal que a ellos no les pasó nada”, recuerda con preocupación.



Vanina Lombardi

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y periodista especializada en ciencia, tecnología, salud, ambiente y desarrollo. Escribe en *Agencia TSS* y es parte del equipo de comunicación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Defender el ambiente: un ejercicio democrático que lleva tiempo y es aprendizaje

Las y los vecinos que componen la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras están tratando de evitar el avance de las actividades extractivas sobre la cuenca Norte del mar Argentino, ubicada a 300 kilómetros de las costas de la provincia de Buenos Aires. A pesar de las causas y los amparos judiciales presentados a lo largo de estos años, en abril de 2024 comenzaron las primeras exploraciones.

26



Atlantico del 4 de enero de 2024.

Durante el verano de 2021 se conoció el interés por el potencial hidrocarburífero y la intención de realizar exploraciones petroleras *offshore* en la denominada Cuenca Argentina Norte, ubicada a unos 300 kilómetros de las playas de Mar del Plata y zonas aledañas, en la provincia de Buenos Aires. La noticia generó preocupación en un grupo de vecinas y vecinos, que no tardaron en comenzar a reunirse y organizarse. Se autoconvocaron en una asamblea abierta el 19 de junio de ese mismo año y conformaron la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.

“Nos reunimos en la rambla, adonde hicimos una asamblea abierta que tuvo una gran convocatoria, con diferentes intervenciones. Definimos el nombre bajo la lluvia y decidimos movilizarnos a la Municipalidad”, recuerda Fernanda, una de las primeras vecinas que participó, quien destaca que ese grupo inicial se multiplicó meses después, cuando se conoció la resolución que autorizaba a las empresas Equinor, Shell e YPF a realizar exploraciones petroleras en esa zona del mar Argentino (se refiere a la Resolución 436/2021, firmada el 30 de diciembre de 2021, que dio lugar a diversas acciones de amparo)¹.

La convocatoria de vecinos se multiplicó cuando se conoció la resolución que autorizaba a las empresas Equinor, Shell e YPF a realizar exploraciones petroleras en esa zona del mar Argentino.

Entonces, decidieron marchar por la ruta 11 hasta la residencia presidencial de Chapadmalal, el 31 de diciembre de 2021, y días después, el 4 de enero de 2022, realizaron lo que se conoció como el primer Atlanticazo. “Lo hicimos el 4 como una forma de fortalecer una fecha antiextractivista, porque Chubut —la provincia que fue pionera en la defensa ambiental en la Argentina, por su lucha en contra de la megaminería— también moviliza los días 4”, aclara Fernanda. Desde entonces, las manifestaciones en defensa del mar se repiten todos los meses, no solo en Mar del Plata, sino también en distintos puntos del país. Esto se debe a que esta asamblea forma parte de

la Red de Comunidades Costeras, integrada por distintos colectivos, organizaciones, multisectoriales y agrupaciones comunitarias de los territorios costeros donde se desarrollan o pretenden desarrollar actividades extractivas que puedan tener impactos socioambientales nocivos, desde el Partido de la Costa, en la provincia de Buenos Aires, hasta Ushuaia, en Tierra del Fuego.

La plataforma continental argentina es uno de los ambientes marinos más extensos y biológicamente más importantes del hemisferio sur. En ella, se han identificado más de 400 especies de peces, 930 de moluscos, 83 de aves marinas, 47 de mamíferos marinos, cinco de tortugas y más de un millar de otras especies pertenecientes a diversos géneros. Además, el océano cumple un rol relevante para atenuar el cambio climático global, ya que es el responsable de capturar un porcentaje sustancial de las emanaciones de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero.

La cuenca argentina se divide en bloques, algunos de los cuales fueron licitados para que las empresas exploren, busquen y saquen petróleo. Uno de ellos es el bloque Cuenca Argentina Norte (CAN) 100, ubicado en la zona que se extiende desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca. Es considerado el más rentable y fue otorgado a las empresas Equinor, Shell e YPF. Abarca un espacio marítimo de 15.000 kilómetros cuadrados, con profundidades que van de 1000 a 3000 metros.

Vecinos que ejercen ciudadanía

Casi en simultáneo con el surgimiento de esta asamblea, el 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que ha sido firmado por 25 de los 33 países de la región y ratificado por 15 de ellos, entre los cuales figura la Argentina. Es el primer tratado ambiental que promueve estos derechos a nivel regional y es el primero en el mundo que establece garantías claras para la protección de quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales.

1. El presente artículo fue elaborado luego de un viaje realizado a la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, entre el 16 y el 17 de marzo de 2024.

Sin embargo, sus postulados todavía no se cumplen por completo, y quienes tratan de proteger sus territorios aún se sienten en riesgo. La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras no es la excepción: en varias ocasiones descubrieron que había policías infiltrados en las marchas o que les sacaban fotos y los filmaban desde los autos. “Lo percibimos, lo notamos y, en base a eso, fuimos generando lineamientos para defendernos y sortear situaciones como esas”, afirma Fernanda.

“El Acuerdo de Escazú dice que hay que escuchar a la población, pero luego se desecha lo que opinamos”, cuestiona Leandro, uno de los asambleístas que ya conocía el Acuerdo porque había participado en otros movimientos ambientales. Como varios de sus compañeros de asamblea, reconoce que las normas son herramientas limitadas. Por eso, “la base política es seguir trabajando juntas en la comunidad y reclamar frente a las autoridades que falta licencia social: hay que usar más herramientas para una construcción ciudadana amplia”, sostiene Viviana, una asambleísta de Chubut que también acompaña la lucha de Mar del Plata. Y agrega: “Hoy, más que nunca, hay que estar con otras asambleas y comunidades, ser más en las calles, juntarnos y defendernos”

Desde su conformación, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras se manifestó en contra de las actividades petroleras mediante distintos tipos de acciones, como intervenciones artísticas, recolección y difusión de información y los Atlanticazos, que continúan todos los meses. Además, este colectivo también interpuso amparos y presentaciones judiciales que lograron demorar la exploración hidrocarburífera.

“Pudimos romper con el cerco mediático y dar a conocer cómo quedan los territorios con la actividad petrolera. Ese es uno de los logros políticos más importantes que tuvimos y lo vemos constantemente en las encuestas y en las calles: en Mar del Plata, el 90% de la gente conoce el tema y, entre ellos, el 80 o 90% está en contra de la explotación *offshore*”, puntualiza Joche, que también es parte de la Asamblea, y enfatiza que en la ciudad no hay licencia social para la actividad, más allá de la cantidad de personas que participan en las marchas.

“Pudimos romper con el cerco mediático y dar a conocer cómo quedan los territorios con la actividad petrolera”, afirma Joche, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.

Llegar hasta acá no fue sencillo y las actividades en defensa del territorio continúan. Quienes integran este colectivo reconocen que sostener la asamblea en el tiempo requiere mucho esfuerzo, así como ejercer una construcción colectiva desde la horizontalidad y con participación activa de la ciudadanía. “Hay apoyo, pero todavía no logramos que eso se traduzca en más participación. Como ciudadanos, estamos formateados para no participar; por eso, las asambleas tenemos el desafío de convocar”, afirma Fernanda, y cuestiona que la gente, en general, está acostumbrada a dejar la decisión en manos de otros. “No importa de donde provengas, ni si tenés formación; ejercer la democracia es un ejercicio cotidiano que lleva tiempo y es aprendizaje”, subraya.

En sintonía con esa idea, su compañero Alejandro sostiene que no se identifica con la definición de “defensor del ambiente” con la que en general se les asocia, porque considera que todos somos parte del ambiente y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. “Si se habla de defensores, pareciera que siempre hay alguien que va a defender el ambiente; ‘entonces me quedo tranquilo, total ellos se ocupan de defenderlo’. No es así, vení y participá. No hay fracturas entre la montaña, la tierra o el mar. El sistema es el que nos divide, en territorios primero, y con las ideas después. No somos los defensores del ambiente, este es un espacio de defensa, vení a ser parte e integralo”, concluye.

**Iván Hojman**

Licenciado en Comunicación Social de la Universidad de La Matanza (UNLaM), Argentina, y máster en Comunicación Científica de la Universidad de Barcelona (UB), España. Es periodista especializado en temas ambientales y científicos.

Un proyecto petrolero amenaza al golfo San Matías a casi 25 años de la histórica ley que protegió sus costas

Con celeridad y sin participación ciudadana se dio de baja la Ley 3308 que resguardaba este ecosistema único en el país y se busca instalar en las costas de Río Negro el mayor puerto de exportación de crudo de Sudamérica. Esto implica riesgos de contaminación y afectaría la biodiversidad y las actividades características del lugar, como el turismo y la pesca.

Ningún logro ambiental es eterno y lo que está ocurriendo en el golfo San Matías, ubicado en las provincias de Río Negro y Chubut, es prueba de ello. Sus costas estuvieron protegidas durante casi 25 años gracias a la Ley 3308 que se obtuvo por movilización popular, pero que fue modificada recientemente de manera exprés ya que se busca instalar el puerto de exportación de petróleo más grande Sudamérica. A pesar de los amedrentamientos, la falta de consulta y la rapidez del cambio, los defensores ambientales de las comunidades locales se organizaron para impedir la construcción de este proyecto que pone en riesgo su “vida de cara al mar”.

Las playas extensas del golfo abrazan al océano Atlántico con un sol potente y vientos patagónicos y la pesca y el turismo son las actividades principales de las localidades costeras. Por sus calles predominan las alusiones a pingüinos o ballenas, ya que allí hay al menos cinco áreas marinas protegidas: Bahía de San Antonio,

Punta Bermeja, Caleta de los Loros, Islote Lobos y Puerto Lobos. Además, el golfo San Matías linda con el Área Natural Protegida “Península Valdés” (Ley Provincial 4722/2001), que fue declarada por UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1999.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur, impulsado por la petrolera YPF y los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro, implica la construcción de un oleoducto que tendría unos 600 kilómetros desde la cuenca neuquina, pasando por la localidad rionegrina de Sierra Grande para finalizar en Punta Colorada, donde se instalaría un puerto de exportación de crudo con monoboyas colocadas a varios kilómetros de la costa. La petrolera argentina de mayoría estatal sostiene que aumentaría casi tres veces la capacidad de evacuación de hidrocarburos de los pozos, lo que beneficiaría a todas las compañías extranjeras que operan en el yacimiento petrolífero Vaca Muerta.

Pobladores que resisten

“Defendemos el lugar donde vivimos; con este proyecto todo lo que conocemos se puede acabar. Somos una comunidad que vive de cara al mar, en relación directa por lo laboral y lo emotivo, nuestra vida transcurre frente la costa”, sostuvo Fabricio Di Giacomo, vecino de Las Grutas e integrante de la Multisectorial Golfo San Matías, una organización conformada en 2022 por personas autoconvocadas de distintas ciudades costeras de la zona, muchas de ellas provenientes de extracciones políticas e ideológicas muy disímiles, que busca proteger al golfo de la explotación petrolera¹.

No es la primera vez que estas costas son vistas como la puerta de salida del petróleo argentino, ya que en la década de los 90 se intentó implementar una iniciativa similar pero las comunidades locales se organizaron y la movilización popular logró que en 1999 se sancionara la Ley 3308 que prohibía los proyectos petroleros en el golfo. Esta norma permitió que se preservara como una de las pocas áreas marítimas del país sin contaminación por hidrocarburos. Así se mantuvo hasta septiembre de 2022, cuando la legislatura de la provincia de Río Negro aprobó la Ley 5594 que da vía libre a la industria petrolera en estas costas.

“La 3308 fue una ley que nació de abajo para arriba y esta mutilación que le hicieron ahora vino de arriba para abajo”, opinó Mirta Carbajal, vecina de San Antonio Oeste que preside la Fundación Inalafquen e integra la Multisectorial.

Esta modificación del marco legal que protegía la zona no se dio sin polémicas: los vecinos y organizaciones denunciaron amedrentamientos, engaños, restricciones a la participación y una celeridad inusitada para la dimensión del cambio. “No nos dejaron entrar a la Legislatura cuando se votó y los legisladores repetían el discurso corporativo, no parecían funcionarios públicos sino de las empresas”, aseveró Di Giacomo, que fue víctima de un ataque por parte de personas vinculadas al sindicato de la construcción que obligó a los manifestantes contrarios a la ley a retirarse de la plaza frente al palacio legislativo de Río Negro.



Mirta Carbajal.

Una vez consumada la ley, en agosto de 2023 fue convocada una audiencia pública en Sierra Grande por la Secretaría de Ambiente rionegrina en la que expusieron prácticamente solo las voces a favor, con argumentaciones ligadas a que el proyecto traería fuentes de trabajo a esa localidad. No se permitió el ingreso a muchos de los defensores ambientales, que decidieron retirarse del encuentro. El gobierno rionegrino sostuvo allí que el impacto ambiental sería de “moderado a bajo”, según los estudios realizados por consultoras privadas.

“Se convocó a la audiencia en un plazo de 30 días y había un estudio de impacto ambiental que tenía 4200 hojas, por lo que se necesitaba un plazo mayor para que la gente lo estudiara. Tenía *links* en hojas impresas e información en inglés; fue claramente un documento que se presentó para que no fuera leído”, afirmó Raquel Perrier, bióloga que protagonizó las marchas de los 90 y madre de Di Giacomo, a quien transmitió los valores de la defensa del ambiente. “Otro de los puntos que atenta contra la participación ciudadana es que es un proyecto que afecta a Neuquén y Chubut, pero solamente podía participar gente de Río Negro”, agregó.

1. El presente artículo fue elaborado luego de un viaje realizado al golfo San Matías entre el 19 y el 22 de marzo de 2024.



Raquel Perrier y Fabricio Di Giacomo.

La protección ambiental se mantuvo hasta septiembre de 2022, cuando la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley 5594 que da vía libre a la industria petrolera en estas costas.

Una amenaza para el medioambiente

Desde el movimiento socioambiental afirman que la construcción del oleoducto y del puerto van en sentido contrario a los compromisos asumidos por el país para mitigar la crisis climática actual, mientras que tampoco se cumple con el Acuerdo de Escazú —al que la Argentina suscribió en 2020—, que garantiza la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Una de las personas que no pudo entrar a la audiencia pública fue Raúl Victorica, perteneciente a la comunidad mapuche y vecino de Sierra Grande. “Todo lo que sea para defender nuestra tierra lo vamos a hacer. Desde nuestros antepasados ha sido así y nosotros tenemos que seguir en contacto con la naturaleza, que es la que nos da de vivir”, aseguró.

La población del golfo San Matías y áreas cercanas se opone a la construcción de un oleoducto y un puerto petrolero en sus costas y denuncia falta de consulta pública y amedrentamientos.

“Este proyecto va a generar puestos de trabajo por cierto tiempo, después que tengan todo listo se van a ir”, opinó Victorica, que fue empleado durante 15 años de la mina de hierro de Sierra Grande que cerró en 1992 y que dejó un pueblo semivacío y un puerto abandonado a unos kilómetros en Punta Colorada, donde se busca instalar el nuevo embarcadero para los buques petroleros.

El aumento del tráfico marítimo y los posibles derrames de crudo al mar son los principales peligros que advierten los lugareños con respecto a este nuevo proyecto. A fines de 2023 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, un derrame de petróleo en unas monoboyas tuvo un alcance de varios kilómetros de extensión y fue un pescador el que dio la alerta, ya que la empresa activó tardíamente los protocolos.

“Gobierno tras gobierno se suceden políticas socioambientales que dejan mucho que desear. La participación ciudadana debería ser inherente a cada comunidad pero se genera ese desapego porque la narrativa hegemónica invisibiliza estos discursos en busca del rédito económico. El compromiso y la sensibilidad con nuestro entorno son la clave para combatir las políticas que quieren imponer acá”, concluyó Di Giacomo.

Con la flora nativa como bandera

Desde Bigand, en el corazón de la región agrícola argentina, César Massi participa de la lucha ambiental con la misma pasión y persistencia con la que cultiva árboles nativos.



Jorgelina Hiba

Periodista especializada en ambiente y en temas agropecuarios. Vive y trabaja en Rosario. Es editora de *Dos ambientes - noticias verdes* y colaboradora en medios locales, nacionales e internacionales. También es columnista en la radio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Como la aldea de Astérix frente al invasor romano, el vivero de plantas nativas que César Massi construyó centímetro a centímetro en la localidad de Bigand, en el centro sur de la provincia de Santa Fe, es un espacio de resistencia e inspiración que nació, crece y se proyecta a futuro en el corazón de la zona núcleo agropecuaria argentina. Desde allí, cada día, este exinformático que se convirtió “gracias a su perro” en un especialista en flora nativa observa, estudia y comparte información sobre las especies propias de la zona, al tiempo que se involucra en debates públicos en torno a temas de la agenda ambiental, como la protección de los humedales y el arbolado urbano en un contexto de crisis climática.

Crece desde el pie

“El Tala” se llama la porción de campo, hasta hace pocos años abandonado, donde este naturalista trabaja con esfuerzo en el cultivo y reproducción de vegetación nativa, con foco en árboles y arbustos. “Arranqué haciendo un poco de todo, pero cuando se fue llenado de plantas dejé de hacer herbáceas (plantas con flores para jardín), porque lo que más me interesa es el arbolado público, siempre pensando a las plantas como herramientas para resolver el problema de resiliencia que tiene el arbolado frente a un clima más agresivo”, cuenta César. Agrega, además, que empezó a darles protagonismo a los árboles rústicos de la región del Chaco —como guayaibí, peteribí, lapacho, tipa colorada, urunday, viraró y lapacho negro—, ya que su resistencia y porte pueden ser aliados de las ciudades del centro norte del país, donde los veranos son cada vez más intensos como consecuencia del cambio climático.

Pero antes del vivero y de la militancia socioambiental hubo una historia que comenzó, como pasa muchas veces, casi de casualidad y gracias a Barto, el perro labrador que durante muchos años fue el fiel compañero de César, cuando todavía vivía en Rosario: “Arranqué recorriendo los parques

de Rosario para pasear al perro, el Barto, un bretón. Un día me senté debajo de un timbó y vi las 'orejas de negro' (el fruto de ese árbol), las agarré y me puse a indagar más. Ese fue el principio”. Corría el año 2013 y César, que todavía trabajaba en un subsuelo como informático, empezó a investigar cómo germinar a esos árboles, que poco a poco fueron ocupando su patio y la vereda. Con curiosidad profundamente humana y tozudez autodidacta, comenzó a participar de grupos de Facebook sobre vegetación nativa, a sacarles fotos a las especies del arbolado urbano rosarino y a participar cada vez más de la conversación pública sobre el tema.

“Me fui especializando en base a lo que veía en la calle, no conocía el monte ni el quebrachal todavía. Me puse a difundir lo que observaba y fue ahí que me contactaron de la Municipalidad para arrancar, junto a un gran equipo de trabajo, con un vivero de nativas en el Bosque de los Constituyentes (el parque público más grande de Rosario)”. Entonces la historia giró hacia el trabajo profesional con nativas.

La fábrica de nativas

A partir de 2015, César dejó atrás definitivamente la vida de oficina, pantallas y servidores para dedicarse a pleno al estudio y la reproducción de vegetación nativa, en el marco de un vivero público único en su tipo que funciona en el ámbito de la municipalidad rosarina. “Fue un proyecto muy lindo que todavía ahí anda, a *full*. Prosperó gracias al trabajo de mucha gente, como Diego Solís y otros que ya estaban allí, y luego pudo ser parte de una política pública de la Municipalidad”, recuerda, para subrayar que allí estuvo casi cinco años, hasta 2019.

A partir de entonces decidió “patear el tablero” y empezar de cero en su pueblo natal, en Bigand, donde reacondicionó una porción de campo “que era un cardal de dos metros de alto”, donde construyó, a pulmón, el invernadero.

Al mismo tiempo, se adentró en un camino “casi más importante que el vivero”, como es el de la militancia socioambiental. Primero fue a través de las redes sociales difundiendo todo lo que aprendía sobre árboles nativos, para luego pasar a ser uno de los referentes del cuidado de la biodiversidad de Santa Fe, así como un actor muy activo dentro del debate por la Ley de Humedales —un debate legislativo que se discute desde hace más de una década— que busca darle un marco normativo al uso y cuidado de estos ecosistemas, que cubren más del 20% del territorio nacional.

“Cuando entré al monte todo cambió. Fui a un quebrachal, en la zona de San Justo, en el centro santafesino. Fue la primera vez que vi un quebracho, y fue la primera vez que me di cuenta de la situación en la que estaban los bosques, porque la mitad del predio estaba talado, pelado con topadoras. Ahí vi lo bueno y lo malo al mismo tiempo”.

Para César, su trabajo con las nativas es su mayor orgullo, ya que se combina con una forma de entender la relación con la naturaleza. “Las redes permitieron amplificar el mensaje y hoy vemos que existe algún tipo de política pública sobre esto, algo impensado hasta hace no tanto”.

Militancia 24/7

A esa primera visita al monte le siguió otra, y después otras más. “Ver los quebrachos pelados, talados, convertidos en postes, me pegó duro. Ahí me di cuenta de que se venía complicada la cuestión para los bosques”, recuerda César, para quien eso fue un antes y un después. “El vivero como trabajo no existe sin lo otro. Voy al monte o al humedal a trabajar, que es mi forma de disfrutar de los lugares. No se puede ser indiferente ante la destrucción, no podés ir a disfrutar de lo hermoso del paisaje y que después no te movilice la quema de dos millones de hectáreas en el delta del Paraná, no podés ver los postes de quebracho pelados y que no se te mueva algo”, razona.

Desde hace un tiempo, cuando empezó la quema a gran escala de los humedales del Paraná a principios de 2020, César se agrupó con gente que venía trabajando el tema más que nada desde dos organizaciones: la Red Nacional de Humedales (RENAHU), que congrega a personas de muchas provincias, y El Paraná no se toca, que se ocupa del bienestar del río desde hace un década y media. “Me terminé metiendo a fondo en lo ambiental por la quema de humedales sobre todo, porque la temática de los bosques en Santa Fe no moviliza tanto”.

Las múltiples señales que ofrece la crisis climática van desde las tormentas severas en la zona central del país a arbolados urbanos que ya no resisten los veranos, pasando por brotes históricos de dengue y la afectación a la producción local de alimentos.



Además del vivero, César se involucró en el debate por la Ley de Humedales, que busca darle un marco normativo al uso y cuidado de estos ecosistemas.



César piensa a las plantas como herramientas para resolver el problema de resiliencia que tiene el arbolado frente a un clima más agresivo.

Una agenda pendiente

¿Qué lugar ocupa la conversación ambiental en la Argentina hoy? Para César, el momento es preocupante y el estado del debate socioambiental en la actualidad es malo. “Este debate queda pisoteado por una emergencia política y económica que no ayuda a hablar de ambiente, paradójicamente cuando más debemos hablar de ambiente. Pero la gente está con otras urgencias”.

“No se puede ser indiferente ante la destrucción, no podés disfrutar de lo hermoso del paisaje y que después no te movilice la quema de dos millones de hectáreas en el delta del Paraná o ver los postes de quebracho pelados”, dice César.

A nivel gestión, según razona, “es todavía peor”, ya que en este ciclo de retracción y ajustes masivos “nadie piensa en destinar fondos a cuestiones ambientales”, a pesar de las múltiples señales que ofrece casi a diario la crisis climática y que van desde las tormentas severas en la zona central del país a arbolados urbanos que ya no resisten los veranos, pasando por brotes históricos de dengue y afectación a la producción local de alimentos. “Nadie está pensando en esto, pareciera”.

“Hay cuestiones que son urgentes, como ciudades donde en poco tiempo ya no se podrá vivir o trabajar con veranos cada vez más cálidos y mayor cantidad de olas de calor. O la cantidad de autos que entran y salen de las ciudades, o la adaptación de las ciudades a lluvias intensas cada vez menos excepcionales, porque se han convertido en normales”, enumera.

El desafío, entonces, es sostener esos debates, mantener la conversación pública sobre la agenda socioambiental en sentido amplio desde la práctica y desde la teoría, desde el trabajo con la tierra y desde el estudio, desde las redes sociales y desde las movilizaciones en las calles y plazas de todo el país. Todo eso al mismo tiempo hace César Massi, en un camino de militancia que alguna vez aprendió, sin saberlo, junto a su perro Barto.



Juan Chiummientto

Por simple curiosidad comenzó a armar un programa de radio en el primer año de la facultad. Desde ese momento continuó relacionado con los medios y la comunicación, a través de distintas experiencias en ámbitos privados y públicos como *La Capital* (Rosario); *El Litoral* (Santa Fe); *MDZ* (Mendoza); *Tiempo Argentino*, *Cronista* y *LetraP* (Buenos Aires); *Diálogo Chino* (Internacional) y *France24* (Francia).

Reciclar, resistir, revolucionar: el movimiento cartonero de Rosario

En la ciudad de Rosario, Santa Fe, la cooperativa Dignidad Cartonera está redefiniendo la gestión de residuos a través de prácticas sostenibles e inclusivas, marcando un hito en la lucha por la dignidad laboral y la protección ambiental.

El debate sobre la gestión de residuos y su impacto en nuestro planeta cobró un nuevo protagonismo en los últimos años y situó a los cartoneros en el centro de una lucha que no solo abarca la conservación ambiental, sino también la inclusión social y los derechos laborales. En este contexto, la tarea de la cooperativa Dignidad Cartonera, perteneciente a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), emerge como un caso digno de destacar.

Con base en Rosario, Santa Fe, la de esta cooperativa es la historia de una transformación: de la marginación a la centralidad en la gestión de residuos. Con décadas de trabajo en la espalda, sus miembros han pasado de ser ninguneados a ser reconocidos como actores clave en

la economía circular. Desde su organización reivindican el derecho a un trabajo digno, pero también a que se los considere trabajadores esenciales en la lucha contra el cambio climático, ya que sus labores diarias contribuyen a la conservación ambiental mediante la recolección y el reciclaje de materiales.

La cooperativa, que comenzó con unos pocos miembros que buscaban sustento en las calles a principios de siglo, hoy es una familia extendida de más de 150 personas que trabajan en colaboración con el Municipio en la implementación de programas de recolección diferenciada. Este modelo ha mejorado las condiciones laborales de los cartoneros y además contribuye a educar a la comunidad sobre la importancia de la separación en origen y el reciclaje, transformando la percepción pública de esta actividad.



“Queremos inspirar a otros a seguir nuestro camino. Es posible crear un mundo más justo y sostenible para todos”, aseguró Juliana Muchiut.

“Yo pertenezco a la generación que en 2001 se quedó sin laburo. Junto con gente del barrio decidimos crear nuestra propia fuente de trabajo, que fue salir a cartonear”, contó Mónica, una de las integrantes con más experiencia de la cooperativa, que en la crisis de 2001 perdió su puesto de trabajo en un comercio del microcentro rosarino y empezó a ganarse la vida con un carro y un caballo¹.

Pasaron años desde aquel momento crucial en la historia reciente del país. En 2017, Rosario aprobó una ordenanza para la recuperación diferenciada de residuos y en 2019 se puso en marcha con un proyecto piloto en el barrio Industrial. Participaron diez recicladores y cinco promotoras de la cooperativa, aunque sin un centro de reciclado, por lo que los materiales se derivaban a la planta municipal. Aunque esta iniciativa mostró cómo la colaboración entre cartoneros, cartoneras y autoridades puede mejorar la gestión de residuos, enfrentó reclamos de algunos sectores internos del propio Municipio por falta de apoyo para expandirse. Este escenario refleja la necesidad de una política integral que aún está pendiente.

Este modelo de trabajo mejoró las condiciones laborales de los cartoneros y educó a la comunidad sobre la importancia de la separación en origen y el reciclaje.

Juliana Muchiut, coordinadora de la cooperativa, destaca este proyecto como un ejemplo del impacto positivo que pueden tener los recicladores cuando se les brinda el espacio y el reconocimiento adecuados: “Fue un punto de inflexión para nosotros. Mostró que, cuando se nos da la oportunidad, podemos contribuir significativamente a la ciudad”, expresó. De esa prueba piloto luego se pasó a otros barrios, como Alberdi, Los Pumitas, Fisherton, entre otros.

Por supuesto, el camino no ha estado exento de desafíos. Desde enfrentar la estigmatización social hasta luchar por el reconocimiento legal y el acceso a recursos básicos, los miembros de la cooperativa han tenido que lidiar con múltiples obstáculos. A pesar de esto, su determinación y unidad han sido fundamentales para lograr avances significativos.

1. Las entrevistas incluidas en el presente artículo fueron realizadas el 7 de marzo de 2024.

Verdaderos defensores ambientales

La transformación de la cooperativa es un reflejo del poder de la comunidad y la determinación frente a adversidades sistémicas. A través de la colaboración, sus miembros establecieron un modelo de gestión de residuos que beneficia al medio ambiente y también fortalece el tejido social de la ciudad. Actualmente operan en un galpón de la zona sur de Rosario, donde reciben lo recolectado por los integrantes de la organización, a quienes se les paga un precio mucho mejor que el que obtendrían por parte de los tradicionales compraventa.

“El galpón ha sido una bendición para nosotros. Antes, los compraventa nos pagaban una miseria por nuestros materiales. Ahora, podemos negociar directamente con las industrias de reciclaje, obteniendo un precio justo por nuestro arduo trabajo. Esto nos permite no solo sobrevivir sino prosperar”, detalló Claudia, que se define como “promotora ambiental”.

La cooperativa continúa abogando por políticas que reconozcan y protejan los derechos laborales de cartoneros y cartoneras, un esfuerzo que requiere persistencia y diálogo constante con las autoridades. “Luchamos por una ordenanza que nos reconozca como trabajadores esenciales del reciclaje; eso nos daría acceso a mejores condiciones y nos permitiría planificar un futuro mejor”, compartió Daniela, que dijo que es cartonera “desde la cuna”, porque “toda mi familia lo es”.

La experiencia de Rosario ofrece lecciones importantes. En primer lugar, subraya la necesidad de integrar a los recicladores informales en los sistemas de gestión de residuos oficiales, reconociendo su contribución vital al medioambiente y a la economía circular. Además, destaca la importancia de abordar el reciclaje desde una perspectiva de inclusión social, y tiene como objetivo garantizar que aquellos en la primera línea de este trabajo no sean dejados atrás.

Mirando hacia el futuro, la cooperativa Dignidad Cartonera aspira a ser un modelo para otras ciudades y países. Su historia es un testimonio de cómo la acción colectiva, guiada por principios de justicia social y sostenibilidad ambiental, puede generar cambios significativos. “Queremos inspirar a otros a seguir nuestro camino, demostrando que es posible crear un mundo más justo y sostenible para todos”, concluye Juliana con esperanza.

La cooperativa Dignidad Cartonera colabora con el Municipio de Rosario en programas de recolección diferenciada de residuos en distintos barrios de la ciudad.



La cooperativa está integrada por más de 150 personas.





Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Sánchez de Bustamante 27 - Piso 1° (C1173AAA) CABA - Argentina
www.farn.org.ar | info@farn.org.ar      /farnargentina